

H. Congreso del Estado de Nuevo León



LXXVI Legislatura

● **PROMOVENTE:** C. DIP. IRAÍS VIRGINIA REYES DE LA TORRE, INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO MOVIMIENTO CIUDADANO DE LA LXXVI LEGISLATURA

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE REFORMA POR ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 29 BIS DE LA LEY DE LA INSTITUCIÓN POLICIAL ESTATAL FUERZA CIVIL.

INICIADO EN SESIÓN: 5 DE JUNIO DEL 2024

SE TURNÓ A LA (S) COMISIÓN (ES): JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA.

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor



PRESIDENCIA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE.-

La que suscribe Diputada Iraís Virginia Reyes de la Torre, y demás integrantes del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano, Dip. Denisse Daniela Puent Montemayor, Dip. Sandra Elizabeth Pámanes Ortíz, Dip. Tabita Ortíz Hernández, Dip. Norma Edith Benítez Rivera, Dip. María Guadalupe Guidi Kawas, Dip. María del Consuelo Gálvez Conteras, Dip. Eduardo Gaona Domínguez, Dip. José Juan Tovar Hernández, Dip. Roberto Carlos Fariás García, Dip. Perfecto Agustín Reyes González, Dip. Raúl Lozano Caballero, Dip. José Alfredo Pérez Bernal y Dip. Raymundo Treviño Cavazos, con fundamento en la fracción II del artículo 96 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, así como los artículos 87 y 88 de la Constitución Política del Estado, correlacionados con los diversos 102, 103 y 104, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, acuso ante esta soberanía a presentar este **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 29 BIS A LA LEY DE LA INSTITUCIÓN POLICIAL ESTATAL FUERZA CIVIL**, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De acuerdo con el artículo 2 de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Nuevo León, es la obligación de todas las autoridades del estado garantizar que todos puedan gozar de los derechos humanos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De igual manera, impulsarán, promoverán, gestionarán y garantizarán la eliminación de obstáculos que limiten a las personas el ejercicio del derecho humano a la igualdad y a la no discriminación e impidan su pleno desarrollo, así como su efectiva participación en la vida civil, política, económica, cultural y social del Estado de Nuevo León.

Igualmente, la ley en su artículo 5 prohíbe cualquier forma de discriminación en el Estado. Además, conceptualiza el concepto de discriminación expresado en forma de diversos actos, acciones y manifestaciones, en contra de personas y comunidades, con el propósito de amular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la particular del Estado.

Entre los actos discriminatorios el referido artículo incluye “*tener tatuajes o perforaciones corporales*”

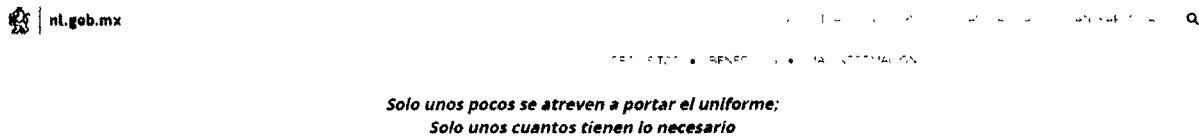
Por otra parte, de acuerdo con el portal de internet de la Gobierno del Estado, para el reclutamiento de personas interesadas en formar parte de las fuerzas de seguridad, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:



nl.gob.mx

RECLUTAMIENTO de Seguridad POSTULA TE AQUÍ

Si tienes entre 19 y 35 años, buscas una opción de vida para ti y tu familia y quieres servir a tu estado, la Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León tiene un lugar para ti en sus corporaciones de: **Fuerza Civil y Fuerza Penitenciaria**.



nl.gob.mx

Solo unos pocos se atreven a portar el uniforme;
Solo unos cuantos tienen lo necesario

Requisitos

- Tener entre 19 y 35 años.
- Ciudadano Mexicano.
- Estatura mínima hombres 1.65 mts
- Estatura mínima mujeres 1.55 mts
- Peso de acuerdo a la estatura
- Ningún tatuaje a la vista
- Sin antecedentes penales
- Escolaridad mínima de Preparatoria.
- Presentar la siguiente papelería
 - Licencia de conducir
 - Credencial de elector (copia por ambos lados).
 - Acta de nacimiento (copia)
 - CURP (copia)
 - Comprobante de domicilio (copia de recibo de agua, luz, teléfono o gas reciente).
 - Cartilla liberada.
 - Último certificado de estudios (copia por ambos lados)
 - R.F.C. con homóloga expedido por el SAT
 - En caso de ser exmilitar se requiere oficio de baja

Como se puede apreciar, uno de los requisitos para ingresar a Fuerza Civil y Fuerza Penitenciaria, es que el interesado no tenga "ningún tatuaje a la vista".

Este requisito resulta claramente violatorio de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Nuevo León. Adicionalmente, la Ley de la Institución

Policial Estatal Fuerza Civil no establece como impedimento para el ingreso, permanencia y promoción, a las instituciones policíacas del Estado, que la persona tenga tatuajes.

La misma trasgresión a la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Nuevo León, se presenta en las disposiciones que emiten los municipios, en relación con el servicio profesional de carrera policial. En ellas, se incluye como requisito no presentar tatuajes, ni perforaciones corporales; aunque al personal femenino se le permite una perforación en cada oreja.

Se reitera que este requisito constituye una forma de discriminación en contra de quienes buscan ingresar a Fuerza Civil y Fuerza Penitenciaria, lo que limita el derecho de la persona a dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo; derecho tutelado por la Constitución federal y local.

A mayor abundamiento, resulta orientador lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo la ponencia de la Magistrada Norma Lucía Piña Hernández, en el Amparo en Revisión 4865/2018, derivado de una demanda de un trabajador por daño moral, en contra de una sociedad mercantil, al alegar discriminación por portar un tatuaje con un símbolo de suástica o esvástica en el lugar de trabajo. La empresa terminó la relación laboral después de que el afectado se negara a borrar u ocultar dicho tatuaje, por las quejas de otros empleados que se identificaban como judíos.

Un juez ordinario civil de la Ciudad de México concedió la razón al afectado y condenó a la empresa al pago de una indemnización por daño moral, así como a ofrecer una disculpa pública en un diario nacional.

La empresa apeló la decisión y la condena fue revocada por una sala del tribunal superior de la Ciudad de México. Posteriormente, el afectado promovió un amparo directo contra la determinación de la sala, que fue concedido por un tribunal colegiado de la Ciudad de México. Ante ello, la empresa interpuso recurso de revisión, del cual conoció la SCJN por relacionarse directamente, con el derecho a la igualdad y no discriminación.

El más Alto Tribunal de la Nación desestimó el amparo. Considero que no existió discriminación de la empresa al terminar la relación laboral, por la negativa de la persona de ocultar o borrar un tatuaje con la cruz suástica o esvástica, exhibido frente a trabajadores que se identifican como judíos. Pero, el caso permitió analizar

el derecho a la igualdad y no discriminación como principio que debe ser observado por autoridades y particulares, sin que ello impida posibilidad de hacer distinciones justificadas.

El resolutivo en cuestión aludió a precedentes de la Corte respecto de que igualdad reconocida en el artículo 1º constitucional, es un derecho humano que consiste en que toda persona debe recibir el mismo trato y gozar de los mismos derechos en igualdad de condiciones que otra u otras personas, siempre y cuando se encuentren en una situación similar que sea jurídicamente relevante.

Al respecto, en la ejecutoria del amparo directo 6/2008, el Pleno de esta Suprema Corte determinó que nuestra Ley Fundamental reconoce el principio de dignidad de la persona humana, pues el artículo 1º constitucional prohíbe expresamente toda forma de discriminación que atente contra ella y contra los derechos y libertades enunciados por el texto de esa norma, y reconoció que la dignidad humana es base y condición sobre la cual descansan los demás derechos fundamentales necesarios para que el ser humano desarrolle integralmente su personalidad.

Adicionalmente, señaló que el derecho al libre desarrollo de la personalidad entraña la facultad de toda persona de ser individualmente como quiere ser, sin coacciones ni controles injustificados por parte del propio Estado o de otras personas, el derecho a decidir sus metas y objetivos de acuerdo con sus valores, ideas, expectativas, gustos, etcétera; en suma, la facultad de elegir su proyecto de vida y la forma como quiere lograrlo; por tanto, entre las expresiones de ese derecho está, en lo que interesa, la libertad de elegir su apariencia personal, como un aspecto que configura la forma en que quiere proyectarse ante los demás, por ende, a la persona corresponde elegir al respecto conforme a su autonomía.

Por lo tanto, en los considerandos del Amparo en Revisión 4865/2018, se mencionó que la portación de tatuajes es una práctica que, por regla general, goza de protección constitucional, en tanto que es una manifestación del libre desarrollo de la personalidad y de la libre expresión; además, la legislación interna de la Ciudad de México, contempla la prohibición de discriminar a cualquier persona por el hecho de tener tatuajes.

De igual manera, se argumentó que esta protección, abarca distintos contextos en los que se encuentre o se desarrolle la persona tatuada, entre ellos, el espacio y ámbito laboral en el que, por regla general, patrones y compañeros de trabajo están cominados a respetar la libre decisión y la libre expresión de la persona en cuanto

a su apariencia corporal y no interferir en ese ejercicio, menos condicionar el derecho fundamental al trabajo negando el acceso al mismo por la portación de tatuajes.

Se agregó que la libertad de expresión tiene un alto valor democrático; que en lo personal permite manifestar aspectos de la individualidad por cualquier medio, inclusive un tatuaje, en ejercicio de este derecho y del libre desarrollo de la personalidad. No obstante, se precisó que estos derechos pueden ser válidamente restringidos, particularmente cuando su expresión configure un discurso de odio. Es decir, aquellos que tienen por objeto generar discriminación, hostilidad y violencia, y que pueden manifestarse también a través de símbolos.

De manera similar, la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León establece en su artículo 198 Bis 5 requisitos de altura para ser integrante de los elementos de seguridad del Estado de Nuevo León. Dicha disposición representa una violación a los derechos laborales de aquellas personas que busquen integrarse a las actividades de seguridad pública, así como del libre desarrollo de la personalidad pues se vulnera el proyecto de vida de todas las personas que no cumplan con estos estándares de estatura.

Así las cosas, en congruencia con los criterios de la Primera Sala de la SCJN, así como en lo dispuesto por la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Nuevo León, la presente iniciativa prohíbe discriminar a quien presente tatuajes y pretenda ingresar a Fuerza Civil y Fuerza Penitenciaria.

Por lo antes expuesto y fundado, solicito de la manera más atenta a la Presidencia, se sirva dictar el trámite legislativo que corresponda, a efecto de que se apruebe en sus términos, el siguiente, proyecto de

DECRETO:

PRIMERO.- Se ADICIONA el artículo 29 BIS a la Ley de la Institución Policial Estatal Fuerza Civil, para quedar como sigue:

Artículo 29 BIS. No podrá negarse el ingreso, profesionalización, permanencia o promoción en la carrera policial, a quien porte tatuajes o perforaciones.

Se exceptúa de la disposición anterior, la portación de tatuajes con símbolos que representen un discurso de odio.

Del mismo modo, no podrá negarse el ingreso, profesionalización, permanencia o promoción en la carrera policial en razón de estatura.

SEGUNDO.- Se DEROGA la fracción III del artículo 198 Bis 5 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León para quedar como sigue:

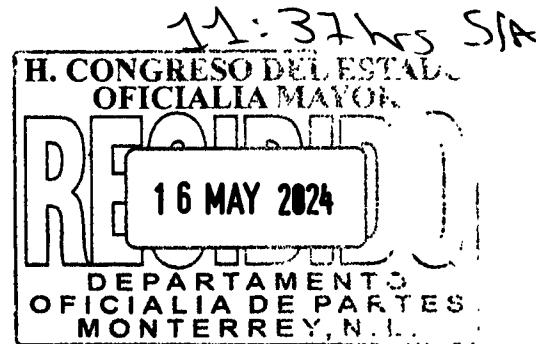
Artículo 198 Bis 5.- Para ser policía en cualquiera de las modalidades previstas por esta Ley, agente de tránsito, custodio o elemento de seguridad de los centros penitenciarios, preventivos, de reinserción social y en los de internamiento y de adaptación social de adolescentes se deberá contar con el perfil de ingreso y cumplir con los siguientes requisitos

I a II....

III. Se deroga

IV a XIV...

TRANSITORIOS



PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

SEGUNDO.- EL Ejecutivo del Estado y Ayuntamientos en un plazo de 60 días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberán ajustar sus disposiciones, a lo dispuesto por el mismo.

TERCERO.- Se deroga cualquier disposición en lo que se oponga a lo preceptuado por el presente Decreto.

Monterrey, Nuevo León, a fecha de su entrega


Dip. Irais Virginia Reyes de la Torre

Dip. Eduardo Gaona Domínguez

Dip. Sandra Elizabeth Pámanes Ortiz

Dip. Tabita Ortiz Hernández

**Dip. Denisse Daniela Puente
Montemayor**

Dip. Norma Edith Benítez Rivera

Dip. María Guadalupe Guidi Kawas

**Dip. María del Consuelo Gálvez
Contreras**

Dip. Perfecto Agustín Reyes González

Dip. José Juan Tovar Hernández

Dip. Roberto Carlos Farías García

Dip. Raúl Lozano Caballero

Dip. José Alfredo Pérez Bernal

Dip. Raymundo Treviño Cavazos

**Integrantes del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano
LXXVI Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo León**



**H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
LXXVI LEGISLATURA**
OFICIALÍA MAYOR

Oficio Núm. PL 5920/LXXVI
Expediente Núm. 18432/LXXVI

**C. DIP. IRAÍS VIRGINIA REYES DE LA TORRE
INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO MOVIMIENTO
CIUDADANO DE LA LXXVI LEGISLATURA
PRESENTE.-**

Con relación a su escrito, mediante el cual presenta iniciativa de reforma por adición de un Artículo 29 Bis de la Ley de la Institución Policial Estatal Fuerza Civil, me permito manifestarle que el C. Presidente del H. Congreso del Estado de Nuevo León:

"Trámite: De enterado y de conformidad con lo establecido en los artículos 24 Fracción III y el Artículo 39 fracción IV del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, se turna a la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, la cual es presidida por el C. Dip. Javier Caballero Gaona."

Reitero a Usted mi consideración y respeto.

ATENTAMENTE
Monterrey, N.L., a 5 de junio de 2024

**MTRA. ARMIDA SERRATO FLORES
LA OFICIAL MAYOR**



C. DIP. JAVIER CABALLERO GAONA
Presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública
Presente.-



Por medio del presente, me permito informarle que en Sesión celebrada el día 5 de junio del presente año, el C. Presidente del H. Congreso del Estado, turnó a la Comisión que Usted preside, los siguientes asuntos:

- Escrito presentado por la C. Dip. Lorena de la Garza Venecia, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la LXXVI Legislatura, mediante el cual presenta Iniciativa que adiciona un Capítulo IV Denominado Acecho, al Título Décimo Cuarto de Delitos contra la Paz y Seguridad de las Personas, así como un artículo 299 bis 1, al Código Penal para el Estado de Nuevo León, en materia de Acecho, al cual le fue asignado el número de Expediente 18442/LXXVI.
- Escrito signado por la C. Dip. Alhinna Berenice Vargas García, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la LXXVI Legislatura, mediante el cual presenta iniciativa de reforma por adición de un Capítulo Segundo del Título Sexto denominado ciberdelitos, del Artículo 225 Bis 1 y al Título del Artículo 207 Bis del Código Penal para el Estado de Nuevo León, turnándose con el número de Expediente 18423/LXXVI.
- Escrito signado por la C. Dip. Iraís Virginia Reyes de la Torre, integrante del Grupo Legislativo Movimiento Ciudadano de la LXXVI Legislatura, mediante el cual presenta iniciativa de reforma por adición de un Artículo 29 Bis de la Ley de la Institución Policial Estatal Fuerza Civil, turnado con el número de Expediente 18432/LXXVI.
- Escrito signado por la C. Libni Natalia Ochoa Garza, mediante el cual presenta iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 260 del Código Penal del Estado, con el fin de aumentar la pena, el cual fue turnado con el número de Expediente 18444/LXXVI.
- Escrito signado por la C. Gerardo Alejandro Puente García, mediante el cual presenta iniciativa de reforma a los artículos 259, 262, 267 y al Capítulo IV Exposición de Menores del Código Penal para el Estado de Nuevo León, al cual le fue asignado el número de Expediente 18446/LXXVI.